



Impacto socioeconómico y ambiental de los centros de retiro con ayahuasca en Costa Rica

Resumen ejecutivo

Basado en la investigación de Dr. Leiner Vargas Alfaro (CINPE, Universidad Nacional de Costa Rica) y Raquel Blanco (INEC), Costa Rica, 2024

INFORME DE INVESTIGACIÓN · COSTA RICA · 2024

Presentación y metodología del estudio

Costa Rica atrae desde hace años a un turismo de bienestar en expansión constante, y dentro de él los centros de retiro que trabajan con ayahuasca ocupan un lugar cada vez más visible dentro de la oferta del país. Este informe ofrece la primera aproximación sistemática a su peso económico, social y ambiental —un ejercicio pionero, dado que hasta ahora este segmento del turismo de bienestar carecía de datos consolidados que permitieran valorar su verdadera magnitud.

La investigación combina técnicas cuantitativas y cualitativas. El núcleo del trabajo consiste en una encuesta —aplicada a través de la plataforma Survey Monkey durante el último trimestre de 2023— dirigida a propietarios, gerentes y personal de 32 de los aproximadamente 60 centros que, según estimación de los propios investigadores, operan actualmente en el país. El cuestionario recoge información sobre ubicación, tipo de actividades, empleo, ingresos y gastos, inversión en infraestructura, contribuciones fiscales, prácticas ambientales, alianzas comunitarias y protocolos de seguridad en ceremonias.

El equipo investigador complementó la encuesta con entrevistas en profundidad a funcionarios de gobiernos locales, líderes comunitarios y expertos en ayahuasca y ecoturismo, además de visitas de campo y entrevistas semiestructuradas a cuatro centros seleccionados como estudios de caso. Esta combinación permite matizar los datos cuantitativos con el contexto, los desafíos y las oportunidades que perciben los propios actores del ecosistema.

Costa Rica y el turismo de bienestar: el marco macroeconómico

El turismo constituye una de las principales actividades económicas de Costa Rica desde hace tres décadas, y el país ha recuperado con rapidez el terreno perdido durante la pandemia. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT, 2023), la vía aérea sigue siendo la ruta de entrada y salida dominante, con el 90 % de los turistas que ingresan y salen del país por esa vía. Solo en junio de 2023 llegaron 202.235 turistas por aire —142.025 por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 60.177 por el Daniel Oduber—, un incremento del 10,1 % y del 5,5 % respectivamente frente al mismo mes de 2022. El acumulado de enero a junio alcanzó 1.338.303 turistas, un 19,4 % más que en el primer semestre de 2022.

Norteamérica concentra la mayor parte de este flujo: 977.783 turistas en la primera mitad de 2023 (+21 % respecto a 2022), encabezados por Estados Unidos (792.944), Canadá (148.973) y México (35.866). Europa aportó 225.617 turistas en el mismo período (+9,3 %), con Francia (40.016), Alemania (39.369) y el Reino Unido (37.006) como principales mercados, seguidos de España (21.293), los Países Bajos (14.280) y Suiza (13.610). El gasto promedio del turista se mantuvo estable en 1.470,3 dólares por persona en 2022, con estancias de entre 12 y 13 noches —de las más largas de la región— y un gasto en servicios turísticos de entre 1.500 y 1.600 dólares.

El empleo turístico, golpeado con una caída del 25 % en 2020, recuperó en 2022 niveles similares a los de 2019, con alrededor de 169.205 personas empleadas. Dentro de este panorama, el turismo de salud y bienestar —la categoría en la que se inscriben los centros de retiro con ayahuasca— representa ya un

10,9 % de los ingresos turísticos totales y un 0,6 % del PIB nacional, cifras que sitúan a este segmento como un nicho pequeño pero de peso creciente dentro de la economía del país.

Características y distribución geográfica de los centros

Los centros encuestados se distribuyen de manera heterogénea a lo largo del territorio costarricense, con una concentración notable en Puntarenas (25 % de la muestra, 8 centros), seguida de San José (12,5 %, 4 centros), Alajuela y Guanacaste (9,4 % cada una, 3 centros), Cartago (6,3 %, 2 centros), y Heredia y Limón (3,1 % cada una, 1 centro). Un dato llamativo: el 31,3 % de los centros —10 de los 32— no reveló su ubicación precisa, un patrón que los propios investigadores vinculan con la falta de regulaciones claras sobre el uso comercial de la ayahuasca en el país.

La mayoría de estos centros se ubica en zonas rurales próximas a montañas, playas, bosques tropicales y parques nacionales, y no todos concentran su actividad exclusivamente en el trabajo con la planta: buena parte combina las ceremonias con retiros de yoga, turismo de aventura y otros servicios de bienestar, en un modelo de negocio diversificado que varía notablemente de un centro a otro.

Impacto en el empleo

La generación de empleo constituye el efecto social más inmediato y medible de estos centros. Los 32 encuestados generan en conjunto 518 puestos de trabajo: 353 a tiempo completo y formal (68 % del total), 86 parciales o informales (17 %) y 79 estacionales o temporales (15 %). Estos empleos sostienen de forma directa a más de 2.000 familias.

Extrapolando esta proporción al universo estimado de 60 centros, la cifra de familias beneficiadas por el empleo directo superaría las 5.000. Si se aplica el multiplicador de empleo indirecto de 1,7 —tomado de Acuña y Ruiz (2000)—, el número total de puestos de trabajo sostenidos por el ecosistema completo asciende a más de 13.000. Buena parte de estos empleos se concentra en zonas rurales fuera del Valle Central, con una participación femenina destacada que, según el informe, resulta especialmente significativa en regiones donde el acceso de las mujeres al empleo formal suele ser más limitado.

La distribución del empleo entre centros es marcadamente asimétrica: mientras un solo centro reporta 100 puestos de trabajo, varios otros operan con apenas uno o dos empleados, reflejo de un ecosistema donde convive un pequeño número de operaciones grandes con una mayoría de proyectos pequeños o familiares.

Ingresos, ventas y contribución al PIB

Los centros encuestados generan un ingreso mensual promedio de 1,2 millones de dólares durante la temporada alta (noviembre-abril) y de 37.500 dólares en temporada baja (mayo-octubre), con ventas anuales que rondan los 14,4 millones de dólares en la muestra. Extrapolando al conjunto del sector, el

estudio estima que su contribución al PIB costarricense podría situarse entre 35 y 40 millones de dólares anuales —una cifra que, según el Banco Central (2024), equivaldría a alrededor del 20 % del valor agregado de la industria cafetera, uno de los sectores de mayor tradición económica del país.

La mayoría de los centros —micro y pequeñas empresas— genera ingresos mensuales de entre 10.000 y 50.000 dólares: en temporada baja, el 28,13 % se ubica en ese rango, mientras que un 37,5 % declara ingresos inferiores a 10.000 dólares. En temporada alta, más del 40 % se mantiene entre 10.000 y 50.000 dólares mensuales. Solo un pequeño porcentaje —6,25 % en cada tramo— reporta ingresos de entre 50.000 y 100.000 dólares, y entre 100.000 y 500.000 dólares respectivamente. El estudio identifica al menos tres centros de mayor tamaño, uno de los cuales supera el millón de dólares mensuales en ingresos, y calcula que alrededor del 15 % del ecosistema corresponde a medianas empresas con alto impacto local, mientras el resto se reparte entre micro y pequeñas empresas —el segmento ampliamente mayoritario— y un grupo reducido de grandes operaciones.

Estructura productiva, costos e inversión

El personal absorbe el 35 % del gasto de los centros —el componente más alto de su estructura de costos—, seguido de las inversiones en infraestructura y equipo (25 %), consumibles (16 %), logística (9 %), promoción y marketing (8 %) y otros gastos no especificados (7 %). Extrapolado al conjunto del ecosistema, el gasto anual en salarios rondaría entre 3 y 4 millones de dólares, con cargas sociales e incentivos adicionales por otros 2 millones. La inversión en infraestructura se sitúa entre 40 y 50 millones de dólares, con un monto similar destinado a adquisición de tierras y permisos, mientras que logística, consumibles y promoción sumarían entre 3 y 4 millones de dólares anuales.

En cuanto a la inversión acumulada en infraestructura, el 33,33 % de los centros declara haber invertido entre uno y tres millones de dólares, y cerca del 70 % se ubica en el rango de 100.000 dólares a tres millones. Un pequeño porcentaje ha superado los diez millones de dólares. La compra de propiedades sigue un patrón similar: 16,67 % por debajo de los 100.000 dólares, 30 % entre 100.000 y 500.000, 23,33 % entre 500.000 dólares y un millón, 26,67 % entre uno y tres millones, y un 3,33 % que supera los diez millones. Muchos de estos centros integran además restaurantes o cocinas propias, con paquetes que incluyen transporte y alimentación de los visitantes.

Demanda y perfil de los visitantes

El estudio extrapola en torno a 45.000 visitantes anuales para el conjunto del sector —cerca del 45 % del total de turistas que declaran el turismo de salud y bienestar como motivo de su viaje a Costa Rica—, con un potencial de crecimiento que los investigadores califican de muy alto. En temporada alta, un 20 % de los centros recibe entre 101 y 500 visitantes mensuales, y solo el 6,67 % supera los 500 visitantes al mes.

El perfil demográfico se concentra en personas de entre 25 y 44 años —el 96,55 % de los centros señala el tramo de 35 a 44 años como el predominante entre sus visitantes—, procedentes mayoritariamente de

Norteamérica, seguidos de Europa, Australia y, en menor medida, Latinoamérica. Un dato relevante para el sector turístico en su conjunto: buena parte de estos visitantes prolonga su estancia en el país más allá de la duración del programa del centro, generando gasto adicional en alojamiento, transporte y otras actividades turísticas.

Estructura de costos operativos

Los gastos operativos de los centros —electricidad, agua, telecomunicaciones, servicios externos y personal— muestran en general una estructura de costos moderada. El 50 % de los centros gasta entre 101 y 500 dólares mensuales en electricidad, y el 81,25 % se mantiene por debajo de los 500 dólares; extrapolado al sector, el gasto anual en electricidad superaría el medio millón de dólares. En agua, el 53,13 % gasta menos de 100 dólares al mes y el 89,38 % se mantiene bajo los 500 dólares, con un gasto sectorial proyectado de alrededor de 200.000 dólares anuales. En telecomunicaciones, el 65,63 % gasta entre 101 y 500 dólares mensuales, con un total sectorial estimado de 400.000 dólares al año.

Los servicios externos y la logística de terceros —transporte, guías, proveedores— representan un gasto mensual inferior a 1.000 dólares para la mitad de los centros, y por debajo de los 5.000 dólares para el 84,38 %; junto con los gastos logísticos generales, el sector completo destinaría alrededor de 2 millones de dólares anuales a esta partida. El gasto en personal nacional se concentra en los tramos bajos: 45,16 % de los centros gasta menos de 5.000 dólares mensuales y el 71,77 % se mantiene por debajo de los 10.000 dólares. Los gastos municipales resultan igualmente moderados —el 87,50 % de los centros enfrenta cargas bajas en este rubro— y lo mismo ocurre con suministros y consumibles, donde el 86,67 % gasta hasta 5.000 dólares mensuales.

Sostenibilidad ambiental y conservación

El compromiso ambiental es uno de los hallazgos más consistentes del estudio. El 96,88 % de los centros encuestados declara implementar prácticas sostenibles o regenerativas, el 84,38 % mantiene programas activos de restauración ecológica y el 73,33 % afirma contar ya con experiencia consolidada en este tipo de prácticas —el 26,67 % restante reconoce que todavía necesita desarrollarla—.

En términos de conservación de tierra, cada centro protege en promedio 57,2 hectáreas, con un rango que va de 0 a 810 hectáreas según el caso. La mayoría se ubica en hábitats de alto valor ecológico: bosque tropical montano, bosque tropical de tierras bajas, selva lluviosa, zonas ribereñas y costeras. Extrapolando al conjunto del sector, el informe estima que unas 5.000 hectáreas estarían bajo alguna forma de conservación asociada a la presencia de estos centros —una superficie comparable a la del Parque Nacional Volcán Tenorio, que cubre unas 5.100 hectáreas—, lo que sugiere una contribución neta positiva frente al uso alternativo de esas tierras para actividades agrícolas o ganaderas.

Desafíos de sostenibilidad y estrategias de mitigación

Junto a estos avances, los propios centros identifican desafíos concretos: escasez de profesionales especializados en prácticas sostenibles, falta de productos ecológicamente seguros, ausencia de sistemas de compostaje o refugios de fauna en algunos casos, dificultades para gestionar plásticos y el suministro de agua en estación seca, conflictos ocasionales con la caza furtiva, procedimientos legales complejos para establecer áreas protegidas, y limitaciones de recursos humanos y financieros —agravadas, en ciertos casos, por operar en instalaciones alquiladas bajo la dirección de terceros propietarios—.

Entre los impactos ambientales negativos que los propios encuestados reconocen como potenciales se mencionan el uso de productos de limpieza convencionales, el consumo excesivo de agua, la acumulación de residuos tras eventos, la construcción que reduce espacio para la vegetación, la contaminación acústica en determinadas actividades y el desplazamiento de hábitats naturales. Como estrategias de mitigación, los centros proponen —y en algunos casos ya aplican— productos de limpieza ecológicos, educación en el uso responsable del agua, construcción de pozos privados, gestión de reciclaje, plantaciones en temporada lluviosa, reducción de ruido en eventos, permacultura, energía solar y LED, recolección de agua de lluvia, construcción sostenible, protección activa de cuencas hidrográficas, compostaje de residuos de cocina y programas de reforestación.

Vínculos institucionales, comunitarios e indígenas

Los centros mantienen alianzas diversas con su entorno: un 38,10 % colabora con comunidades indígenas, un 19,05 % con entidades educativas (escuelas, colegios, universidades), un 16,67 % con otros actores locales, un 14,29 % con organizaciones ambientales y un 11,90 % con grupos de mujeres. Estas cifras, señala el informe, reflejan un interés particular por la integración cultural y el respeto hacia las comunidades indígenas, más allá de la generación directa de empleo.

En el terreno de la colaboración con comunidades indígenas, los centros mencionan formas de apoyo que incluyen financiamiento directo, colaboración en la educación de los visitantes sobre las prácticas de estas comunidades, establecimiento de relaciones comerciales justas, plantación de árboles y creación de bosques alimentarios, participación en proyectos de infraestructura, recaudación de fondos para donaciones directas y apoyo financiero para procesos de recuperación de territorios indígenas.

Efectos sociales: contribuciones y tensiones

Más allá del empleo, los encuestados destacan contribuciones sociales concretas: colaboración en educación continua y proyectos científicos —incluido alojamiento a investigadores—, apoyo directo a la cultura local mediante espacios para talleres comunitarios, iniciativas de salud comunitaria como clínicas gratuitas, participación en proyectos de reforestación a largo plazo, patrocinio de escuelas, descuentos a residentes locales, apoyo a la limpieza de playas y voluntariado, además de programas de capacitación en construcción con bambú, permacultura y organización de mercados agrícolas locales.

El informe no elude las tensiones que también señalan los encuestados: preocupación por el ruido, el uso excesivo de agua, el tráfico y el deterioro de carreteras; el riesgo de que estos centros generen una «burbuja» que segregue a los visitantes de la comunidad local, limitando la interacción entre ambos grupos; y posibles brechas de acceso y de compensación laboral entre quienes trabajan en la industria del retiro y quienes no. El estudio encuadra estos riesgos como fenómenos compartidos con otros enclaves turísticos —no exclusivos de este sector— y los presenta como parte de un proceso de integración con las comunidades locales que, como toda actividad emergente, requiere tiempo y construcción mutua de confianza.

Protocolos de seguridad y marco regulatorio

Costa Rica no cuenta todavía con un marco regulatorio o administrativo específico para estos centros. Entre los factores que, según los encuestados, atraen a los participantes a un centro en particular destacan la conexión personal, la seguridad y familiaridad del entorno, la ubicación en espacios naturales prístinos, la reputación y el boca a boca, la autenticidad de la experiencia y la calidad de los facilitadores.

Sobre la conveniencia de regular el sector, las opiniones se dividen: menos del 20 % de los encuestados se opone abiertamente a una regulación gubernamental, mientras la mayoría se inclina por fórmulas de autorregulación —un protocolo común de seguridad, un organismo autorregulador del sector— aunque una parte reconoce la necesidad de que el Estado establezca, en algún momento, un marco legal que garantice la seguridad de los participantes.

En materia de protocolos concretos, el estudio documenta un nivel de preparación considerable: el 96,55 % de los centros cuenta con facilitadores capacitados en el conocimiento de las plantas, el 93,10 % realiza preselección de participantes, el 89,66 % ofrece apoyo de integración posterior al retiro, el 75,86 % dispone de suministros de primeros auxilios y de personal de apoyo tanto femenino como masculino, el 68,97 % tiene un protocolo de emergencia establecido, el 65,52 % capacita a su personal en primeros auxilios, el 55,17 % imparte talleres de orientación y seguridad, el 44,83 % cuenta con médicos o terapeutas disponibles, y el 24,14 % dispone de guardias de seguridad. En todos los centros que sirven plantas, los participantes firman acuerdos de divulgación y consentimiento informado.

Visión de futuro y recomendaciones estratégicas

A partir de sus hallazgos, el informe plantea una serie de líneas de acción para maximizar el impacto positivo del sector: fomentar la colaboración entre los centros y las autoridades locales y nacionales para desarrollar marcos legales claros; establecer estándares comunes de seguridad, ética y sostenibilidad —incluida la certificación de facilitadores— junto con asociaciones del sector y organismos reguladores; reforzar los protocolos de emergencia en colaboración con profesionales médicos locales; y fomentar la investigación colaborativa, incluida la creación de un repositorio de datos compartido entre centros que respalde el conocimiento científico sobre los efectos e impactos de estos retiros.

A ello se suman recomendaciones para ampliar la participación comunitaria —contratación y compras locales, contribución a infraestructura como escuelas y servicios de salud—, profundizar las prácticas sostenibles mediante inversión en infraestructura ecológica, energías renovables y programas de reducción de residuos, fortalecer las alianzas con comunidades indígenas garantizando una distribución equitativa de los beneficios económicos, ampliar los programas de educación y sensibilización ambiental, y promover un turismo responsable que minimice el impacto ecológico y maximice la inclusión y la equidad para las comunidades más vulnerables.

El propio informe apunta que Costa Rica podría, en principio, multiplicar por cinco su capacidad instalada en este segmento, dadas las condiciones logísticas del país y el ecosistema ya existente —un potencial de crecimiento que, según los investigadores, favorecería simultáneamente el empleo rural, el valor agregado del turismo, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de quienes participan en estas experiencias.

Conclusión

El estudio describe un sector todavía joven pero ya económicamente relevante para las zonas rurales de Costa Rica, con una huella ambiental mayoritariamente positiva, vínculos comunitarios en desarrollo activo y un nivel de autoexigencia en materia de seguridad que contrasta con la ausencia de un marco regulatorio propio. Los centros de retiro que trabajan con ayahuasca aparecen, en esta primera fotografía del ecosistema, como actores con potencial para consolidarse dentro del turismo de bienestar costarricense —siempre que el crecimiento del sector vaya acompañado de estándares compartidos, alianzas equitativas con las comunidades indígenas y locales, y una gestión ambiental que sostenga en el tiempo los resultados ya observados.

